

CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

La Diputada **Pilar Vallugera i Balanà** del Grupo Parlamentario **REPUBLICANO** al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, y **solicita su contestación por escrito.**

Congreso de los Diputados, a 5 de mayo de 2025

Pilar Vallugera i Balanà

Diputada

G.P. Republicano



En las últimas semanas, varios medios de comunicación han recogido informaciones preocupantes sobre las prácticas que estarían teniendo lugar en los juzgados de violencia sobre la mujer de Barcelona, bajo la responsabilidad de D^a. Francisca Verdejo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Barcelona y miembro de la Mesa contra la Violencia Machista que lidera el Ayuntamiento de la ciudad.

Testimonios de mujeres afectadas, profesionales del ámbito jurídico y entidades feministas de referencia, como Ca la Dona, han expresado su preocupación ante situaciones de maltrato institucional, revictimización y desprotección de las mujeres que acuden a la justicia en busca de amparo ante las violencias machistas.

Según estas entidades, existe constancia al menos desde el año 2017 de un patrón de actuación que podría estar generando desconfianza y desprotección en las víctimas. Esta situación, mantenida en el tiempo, pone de manifiesto deficiencias estructurales en la respuesta institucional ante las violencias machistas y exige una revisión urgente de los protocolos y mecanismos de control para garantizar la protección efectiva de los derechos de las mujeres.

En esta misma línea, recientemente se han hecho públicos testimonios de hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia machista que han manifestado sentirse desamparados e ignorados por el sistema judicial, especialmente en casos tramitados por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Barcelona. Estos jóvenes relatan que, a pesar de haber vivido situaciones de violencia evidentes, no fueron escuchados ni considerados por parte de los órganos judiciales, y que incluso en algunos casos tuvieron que seguir conviviendo con los agresores. Sus testimonios denuncian una falta de protección sistémica que ha dejado una profunda impronta en su confianza en la justicia. Tal y como decía uno de ellos: *«Yo ya no creo en la justicia»*. Esta nueva ola de relatos, procedentes del entorno familiar directo de las víctimas, refuerza la idea de que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural que afecta también a los hijos e hijas de las mujeres supervivientes, que a menudo quedan invisibilizados en el proceso judicial.

Ante estas informaciones y hechos, diferentes miembros de Esquerra Republicana se han hecho eco de la situación y están llevando a cabo acompañamiento directo a las víctimas. En este sentido, la diputada del Parlament de Catalunya y portavoz de Justicia, Ana Balsera, ha denunciado reiteradamente esta realidad en diferentes intervenciones parlamentarias y ha exigido que se analice por qué Cataluña es el territorio donde se deniegan más órdenes de protección. Por otra parte, la concejala en el Ayuntamiento de Barcelona, Eva Baró, ha



trasladado también la cuestión al consistorio para denunciar la violencia institucional que reciben muchas víctimas en los juzgados. A esto se suma la labor de la secretaria de Feminismos del partido, Mar Andreu, que ha respaldado y visibilizado las denuncias de mujeres que relatan un maltrato institucional por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Barcelona.

Como respuesta a estas actuaciones legítimas y necesarias en el ejercicio de sus funciones políticas e institucionales, la señora Verdejo ha presentado una queja formal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la diputada Balsera, la concejala Baró, la secretaria Andreu, una abogada del turno de oficio y una de las mujeres que ha participado en las concentraciones, solicitando amparo institucional respecto de ellas. Lejos de limitarse a una defensa técnica o jurídica, la jueza formuló valoraciones sobre el discurso político de la diputada, llegando a cuestionar la legitimidad de su intervención en materia de violencias machistas y acusándola de generar «alarma social».

Ana Balsera consideró esta tentativa de deslegitimar la acción política de representantes institucionales que denuncian situaciones de posible vulneración de derechos como un ataque a su libertad política, por lo que solicitó el amparo del Parlament de Catalunya. El Parlament, reconociendo la gravedad de los hechos, otorgó dicho amparo y recalcó que los y las representantes políticos deben poder desempeñar su labor con libertad, sin ser objeto de reproches o señalamientos impropios por parte de otros poderes.

Este episodio pone de manifiesto no solo las dificultades que viven las mujeres víctimas de violencia machista en su relación con las instituciones, sino también los obstáculos y presiones que afrontan aquellas personas que, desde la política, alzan la voz para denunciar estas situaciones y exigir responsabilidades.

En este sentido, cabe recordar que el Convenio de Estambul, ratificado por el Estado español, establece en su artículo 5 la obligación expresa de los estados de no cometer ningún acto de violencia contra las mujeres y de garantizar que las autoridades, funcionarios, agentes e instituciones estatales, así como otros actores que actúan en su nombre, actúen de acuerdo con dicha obligación. Asimismo, exige la adopción de medidas legislativas y otras acciones necesarias para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia, incluso cuando sean cometidos por actores no estatales.

En el ámbito catalán, la Ley 5/2008 define la violencia institucional como las acciones u omisiones de las autoridades, el personal público y los agentes de cualquier organismo o



institución pública que retrasan, obstaculizan o impiden el acceso a las políticas públicas y al ejercicio de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. También se considera violencia institucional la falta de diligencia debida por parte de las administraciones, especialmente cuando esta carencia se convierte en un patrón de discriminación estructural o se manifieste a través de prácticas revictimizadoras o interpretaciones discriminatorias del derecho. La propia ley define la diligencia debida como la obligación de los poderes públicos de actuar con agilidad y eficiencia, y de asegurar que todos los agentes públicos y actores que actúan en su nombre cumplan con esta obligación, con el objetivo de prevenir, investigar, perseguir, sancionar y reparar adecuadamente los actos de violencia machista.

En consecuencia, todos los poderes públicos tienen la obligación de garantizar tanto la protección efectiva de las víctimas como el ejercicio libre y seguro de la representación política en defensa de los derechos humanos. El poder ejecutivo, en el marco de sus competencias, debe velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, asegurar la rigurosa aplicación de los protocolos de atención y garantizar que no se produzcan situaciones de maltrato institucional ni de obstaculización a la acción política legítima.

La persistencia de esta situación desde hace años, su impacto directo en la vida de muchas mujeres –y de sus hijos e hijas–, y los intentos de cuestionar a aquellas que denuncian estas prácticas, exigen una respuesta firme, clara e inmediata por parte del Gobierno.

Por todo ello, y en ejercicio de la función de control que corresponde al poder legislativo, se formulan las siguientes preguntas al Gobierno.

1. ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para garantizar que las víctimas de violencia machista reciban una atención institucional libre de violencia institucional y de revictimización?
2. ¿Cómo piensa el Gobierno asegurar que los órganos de participación en materia de violencia machista estén formados por personas comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno revisar los protocolos y mecanismos de supervisión de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer?



CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS



4. ¿Qué valoración hace el Gobierno del cumplimiento de la obligación legal de formación específica en violencia de género por parte de jueces y magistrados, y tiene constancia de su seguimiento efectivo?
5. ¿Cómo garantizará el Gobierno el cumplimiento de los compromisos derivados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Convenio de Estambul?
6. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno incluir el principio de diligencia debida a la Ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, dando así cumplimiento al Convenio de Estambul?



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO GENERAL

05 MAY. 2025 12:14:27

Entrada **67187**

PE sobre violència institucional_0525

Competencia	Otros Expedientes
Tipo Expediente	300-Escrito en lengua española distinta del castellano, oficial en Comunidad Autónoma (art. 92.1)

Fdo.: Pilar VALLUGERA BALANÀ
Diputada



**ESQUERRA
REPUBLICANA**

GP Republicano
Carrera de San Jerónimo, 40, 5a pl.
28071 Madrid
Centraleta. Telf. 91 390 59 95
c/e: administracioerc@congreso.es
Prensa. Telf. 91 390 56 87
c/e: premsaerc@congreso.es

A LA MESA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

La Diputada **Pilar Vallugera i Balaña** del Grup Parlamentari **REPUBLICÀ**, a l'empara del que es disposa en l'article 185 i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern espanyol les següents preguntes, **sol·licitant la seva resposta per escrit.**

Congrés dels Diputats, a 5 maig de 2025

Pilar Vallugera i Balaña
Diputada
G.P. Republicà

**ESQUERRA
REPUBLICANA**

Les darreres setmanes, diversos mitjans de comunicació han recollit informacions preocupants sobre les pràctiques que s'estarien produint als jutjats de violència sobre la dona de Barcelona, sota la responsabilitat de la Sra. Francisca Verdejo, titular del Jutjat de Violència sobre la Dona número dos de Barcelona i membre de la Taula contra la Violència Masclista que lidera l'Ajuntament de la ciutat.

Testimonis de dones afectades, professionals de l'àmbit jurídic i entitats feministes de referència, com Ca la Dona, han expressat la seva preocupació davant situacions de maltractament institucional, revictimització i desprotecció cap a les dones que acudeixen a la justícia a la recerca d'empara davant les violències masclistes.

Segons aquestes entitats, existeix constància com a mínim des de l'any 2017 d'un patró d'actuació que podria estar generant desconfiança i desprotecció en les víctimes. Aquesta situació, mantinguda en el temps, posa de manifest deficiències estructurals en la resposta institucional davant les violències masclistes, i reclama una revisió urgent dels protocols i mecanismes de control per garantir la protecció efectiva dels drets de les dones.

Seguint aquesta línia, recentment s'han fet públics testimonis de fills i filles de dones víctimes de violència masclista que han manifestat sentir-se desemparats i ignorats pel sistema judicial, especialment en casos tramitats pel Jutjat de Violència sobre la Dona número dos de Barcelona. Aquests joves relaten que, malgrat haver viscut situacions de violència evidents, no van ser escoltats ni considerats per part dels òrgans judicials, i que, fins i tot, en alguns casos van haver de continuar convivint amb els agressors. El seu testimoni denuncia una manca de protecció sistèmica que ha deixat una profunda empremta en la seva confiança en la justícia. Tal com deia un d'ells: *"Jo ja no crec en la justícia"*. Aquesta nova onada de relats, procedents de l'entorn familiar directe de les

**ESQUERRA
REPUBLICANA**

víctimes, reforça la idea que no es tracta de casos aïllats, sinó d'un problema estructural que afecta també els fills i filles de les dones supervivents, que sovint queden invisibilitzats en el procés judicial.

Davant aquestes informacions i fets, diferents membres d'Esquerra Republicana s'han fet ressò de la situació i estan duent a terme acompanyament directe a les víctimes. En aquest sentit, la diputada al Parlament de Catalunya i portaveu de Justícia, Ana Balsera, ha denunciat reiteradament aquesta realitat en diferents intervencions parlamentàries i ha exigint que s'analitzi per què Catalunya és el territori on es deneguen més ordres de protecció. D'altra banda, la regidora a l'Ajuntament de Barcelona, Eva Baró, ha traslladat també la qüestió al consistori per denunciar la violència institucional que reben moltes víctimes als jutjats. A això s'hi suma la tasca de la secretària de Feminismes del partit, Mar Andreu, que ha donat suport i visibilització a les denúncies de dones que relaten un maltractament institucional per part del Jutjat de Violència sobre la Dona número dos de Barcelona.

Com a resposta a aquestes actuacions legítimes i necessàries en l'exercici de les seves funcions polítiques i institucionals, la Sra. Verdejo ha presentat una queixa formal al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) contra la diputada Balsera, la regidora Baró, la secretària Andreu, una advocada del torn d'ofici i una de les dones que ha participat en les concentracions, sol·licitant empara institucional contra elles. Lluny de limitar-se a una defensa tècnica o jurídica, la jutgessa va formular valoracions sobre el discurs polític de la diputada, arribant a qüestionar la legitimitat de la seva intervenció en matèria de violències masclistes i acusant-la de generar "alarma social".

Aquest intent de deslegitimar l'acció política de representants institucionals que denuncien situacions de possible vulneració de drets va ser considerat per Ana Balsera com un atac a la seva llibertat política, fet pel qual va sol·licitar l'empara del Parlament de Catalunya. El Parlament, reconeixent la gravetat dels fets, va

**ESQUERRA
REPUBLICANA**

atorgar aquesta empara, remarcant que les representants polítiques han de poder exercir la seva tasca amb llibertat, sense ser objecte de retrets o senyalaments impropis per part d'altres poders.

Aquest episodi posa de manifest no només les dificultats que viuen les dones víctimes de violència masclista en la seva relació amb les institucions, sinó també els obstacles i pressions que afronten aquelles que, des de la política, alcen la veu per denunciar aquestes situacions i exigir responsabilitats.

En aquest sentit, cal recordar que el Conveni d'Istanbul, ratificat per l'Estat espanyol, estableix en el seu article 5 l'obligació expressa dels estats de no cometre cap acte de violència contra les dones i de garantir que les autoritats, funcionaris, agents i institucions estatals, així com altres actors que actuen en nom seu, actuïn d'acord amb aquesta obligació. Així mateix, obliga a adoptar mesures legislatives i altres accions necessàries per prevenir, investigar, sancionar i reparar els actes de violència que en formen part, fins i tot quan siguin comesos per actors no estatals.

En l'àmbit català, la Llei 5/2008 defineix la violència institucional com les accions o omissions de les autoritats, el personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública que retarden, obstaculitzen o impedeixen l'accés a les polítiques públiques i a l'exercici dels drets de les dones a viure una vida lliure de violències. També es considera violència institucional la manca de diligència deguda per part de les administracions, especialment quan aquesta manca es converteix en un patró de discriminació estructural o es manifesta a través de pràctiques revictimitzadores o interpretacions discriminatòries del dret. La mateixa llei defineix la diligència deguda com l'obligació dels poders públics d'actuar amb agilitat i eficiència, i d'assegurar que tots els agents públics i actors que actuen en el seu nom compleixin amb aquesta obligació, amb l'objectiu de prevenir, investigar, perseguir, sancionar i reparar adequadament els actes de violència masclista i protegir-ne les víctimes.

**ESQUERRA
REPUBLICANA**

En conseqüència, tots els poders públics tenen l'obligació de garantir tant la protecció efectiva de les víctimes com l'exercici lliure i segur de la representació política en defensa dels drets humans. El poder executiu, dins del marc de les seves competències, ha de vetllar pel correcte funcionament dels serveis públics, assegurar l'aplicació rigorosa dels protocols d'atenció i garantir que no es produeixin situacions de maltractament institucional ni d'obstaculització a l'acció política legítima.

La persistència d'aquesta situació des de fa anys, el seu impacte directe en la vida de moltes dones —i dels seus fills i filles—, i els intents de qüestionar aquelles que denuncien aquestes pràctiques, exigeixen una resposta ferma, clara i immediata per part del Govern.

Per tot això, i en exercici de la funció de control que correspon al poder legislatiu, es formulen les següents preguntes al Govern.

1. Quines actuacions té previstes el Govern per garantir que les víctimes de violència masclista rebin una atenció institucional lliure de violència institucional i revictimització?
2. Com pensa el Govern assegurar que els òrgans de participació en matèria de violència masclista estiguin formats per persones compromeses amb la defensa dels drets de les dones?
3. Té previst el Govern revisar els protocols i mecanismes de supervisió dels jutjats especialitzats en violència sobre la dona?
4. Quina valoració fa el Govern sobre el compliment de l'obligació legal de formació específica en violència de gènere per part de jutges i magistrats, i si en té constància del seu seguiment efectiu?



**ESQUERRA
REPUBLICANA**

5. Com garantirà el Govern el compliment dels compromisos derivats del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i del Conveni d'Istanbul?
6. Quan té previst el Govern incloure el principi de diligència deguda a la Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, complint així amb el Conveni d'Istanbul?